

# FGE

FISCALÍA INFORMA

Boletín

No. 289

05 de abril 2019



**SE ABRIÓ  
INSTRUCCIÓN  
FISCAL POR  
MICROTRÁFICO EN  
QUITTO**





## SE ABRIÓ INSTRUCCIÓN FISCAL POR MICROTRÁFICO EN QUITO

PICHINCHA

Las 12 personas detenidas en el operativo "Caldera", fueron procesadas por la Fiscalía bajo cargos de asociación ilícita para microtráfico de drogas (mediana y alta escala). Se abrió una instrucción fiscal por 30 días.

El referido operativo se desarrolló la madrugada del jueves 4 de abril y fue dirigido por Jimena Moina, Fiscal Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (FEDOTI) de Pichincha. La Fiscalía contó con el apoyo de las unidades técnicas y tácticas de la Policía Nacional, y nueve fiscales con sus respectivos equipos de apoyo.

En los 11 puntos allanados en los sectores de Calderón y Carapungo, al norte de Quito, bajo la dirección de la Fiscalía, los agentes policiales de Criminalística levantaron indicios como celulares y dinero en efectivo. En uno de los domicilios se encontraron 119 gramos de cocaína y varias dosis de la misma droga se hallaron en otros dos inmuebles allanados.

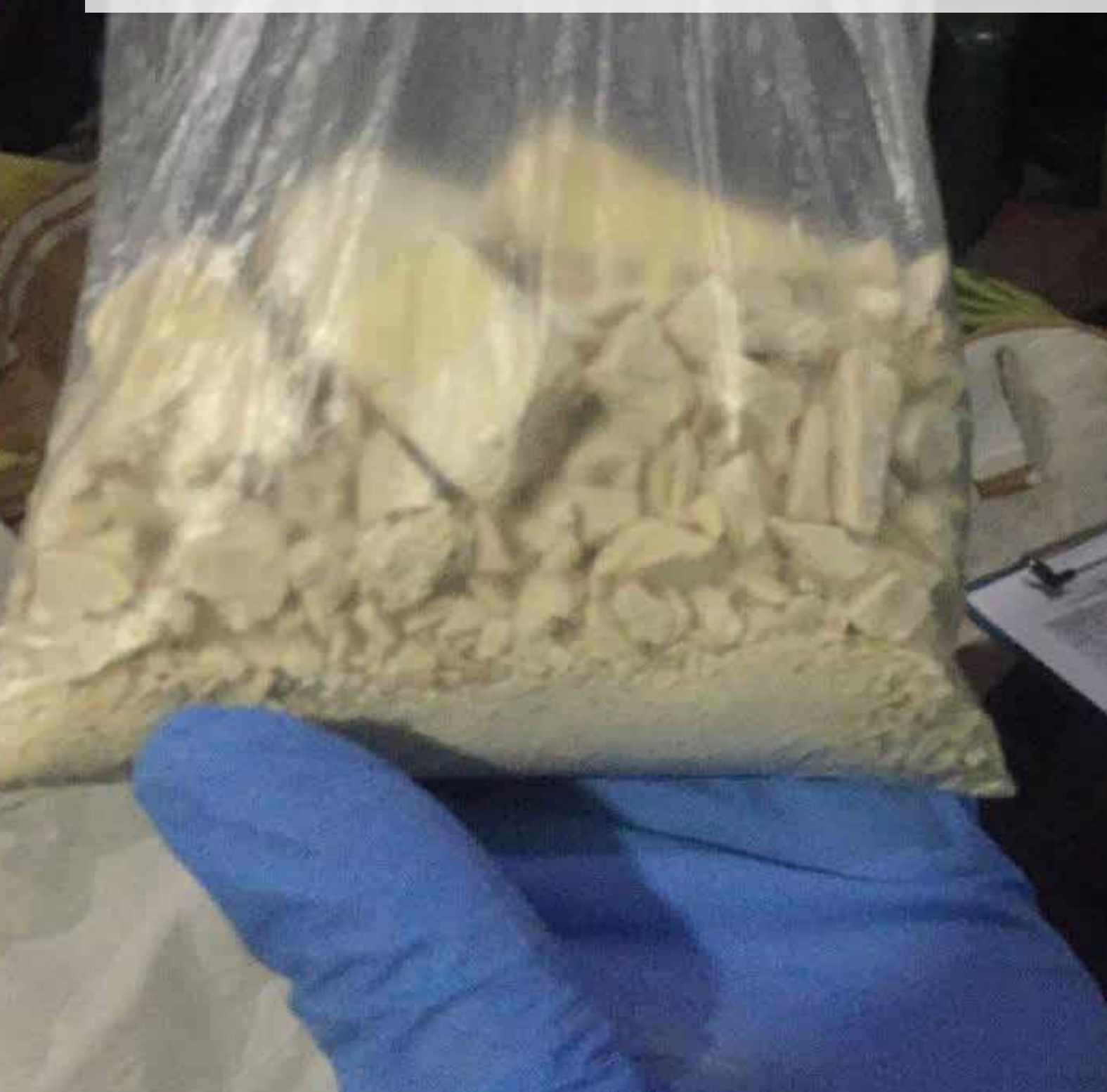
En la audiencia de formulación de cargos, instalada la noche del 4 de abril de 2019, la fiscal del caso expuso ante la jueza de flagrancia, Luz María Serrano, que la investiga-

ción previa a este grupo de personas se inició en abril de 2018 y se intensificó en noviembre del mismo año.

Explicó los resultados de los informes de seguimientos y vigilancias realizados por los agentes investigadores, que habrían determinado la forma de actuar del grupo: la venta de cocaína la realizaban en las calles del barrio de Calderón, escondían las dosis entre matorrales, bloques huecos o al pie de los postes de luz.

Expuso además los informes de lo encontrado en el operativo "Caldera" y formuló cargos por asociación ilícita para tráfico de droga en mediana escala (artículos 370 y 220 numeral 1 literal b, en contra de cuatro procesados; por los mismos artículos pero bajo el literal c (alta escala) a la persona que tenía en su custodia los 119 gramos de cocaína; y, para los otros 7 se presentaron cargos por asociación ilícita.

A 11 ciudadanos se les dictó prisión preventiva y 1 persona fue trasladada a una casa de confianza por su condición de maternidad, ya que no se cumplieron las condiciones para arresto domiciliario.





# SENTENCIAN A 5 INTEGRANTES DE UNA ORGANIZACIÓN DELICTIVA QUE OPERABA EN LA CAPITAL

## PICHINCHA

Cinco de los ocho integrantes de una organización delictiva que operaba en el Comité del Pueblo, al norte de Quito, fueron sentenciados como autores directos por los delitos de tráfico ilícito de drogas y delincuencia organizada, en concurso real de infracciones.

En la audiencia de juzgamiento, la fiscal Maribel Vargas, de la Unidad de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional de Pichincha, exhibió las pruebas testimoniales, documentales y periciales recopiladas durante la etapa de instrucción fiscal que determinaron la materialidad de los delitos y la responsabilidad de los procesados José Antero G., María del Carmen H., Edison Alejandro H., Elisa Andrea H., y Sabrina Mercedes L.

Entre las pruebas exhibidas por la Fiscalía constan: el testimonio de los agentes investigadores y aprehensores, el acta de pesaje y destrucción de la droga, una pericia química del alcaloide que dio como resultado pasta base de cocaína, el acta de reconocimiento de evidencias, el informe ocular técnico, así como vigilancias y seguimientos autorizados por la autoridad competente, entre otras.

Con los elementos probatorios, el Tribunal de Garantías Penales integrado por los magistrados Edmundo Samaniego (ponente), Juan Méndez y Julio César Obando declaró la culpabilidad de los cinco ciudadanos por los delitos de tráfico de drogas en alta escala y delincuencia organizada. Los otros (tres) integrantes de la organización se sometieron a un procedimiento abreviado y cumplen penas privativas de libertad de 30 y 40 meses.

La Fiscalía, con el apoyo técnico de la Policía Nacional, inició en enero de 2018 una investigación previa en virtud de que tenía conocimiento sobre la existencia de una organización dedicada al acopio, expendio y comercialización de sustancias sujetas a fiscalización, en el Comité del Pueblo, por lo que se

realizaron vigilancias y seguimientos continuos e interceptaciones telefónicas a los integrantes de esta red delictiva, liderada por José Antero G.

La investigación se cerró tres meses después con el allanamiento a ocho inmuebles (7 en el Comité del Pueblo y 1 en Conocoto). En el domicilio del cabecilla de esta organización, los agentes policiales incautaron 3.169 gramos de pasta base de cocaína, balanzas electrónicas, teléfonos celulares y USD 3.480, mientras que en la vivienda que compartían otros dos procesados se incautaron 174 gramos de pasta de cocaína. En ese acto urgente se logró la aprehensión de ocho ciudadanos.

### Sentencias condenatorias

El Tribunal sentenció a José Antero G., a 10 años de prisión por acopio, expendio y comercialización de droga en alta escala y a 7 años de pena privativa de libertad por el delito de delincuencia organizada, por ser líder de la organización, en concurso real de infracciones, por lo que la pena aumentó a 17 años.

En cambio, a Edison Alejandro H. y María del Carmen H., se les sentenció a una pena privativa de libertad de 10 años (5 por el delito de tráfico de drogas en alta escala y 5 por delincuencia organizada). A la ciudadana Sabrina Mercedes L., se le sentenció a 5 años de pena privativa de libertad por el delito de delincuencia organizada. La sentencia a la ciudadana Elisa Andrea H., será anunciada de manera escrita por el Tribunal, debido a que la procesada está en estado de gestación.

### Dato:

*El concurso real de infracciones, según el artículo 20 del Código Orgánico Integral Penal, COIP, se da cuando a una persona le son atribuidos varios delitos autónomos e independientes por lo que se acumularán las penas.*



## 26 AÑOS PARA AUTOR DE ASESINATO EN BABAHOYO

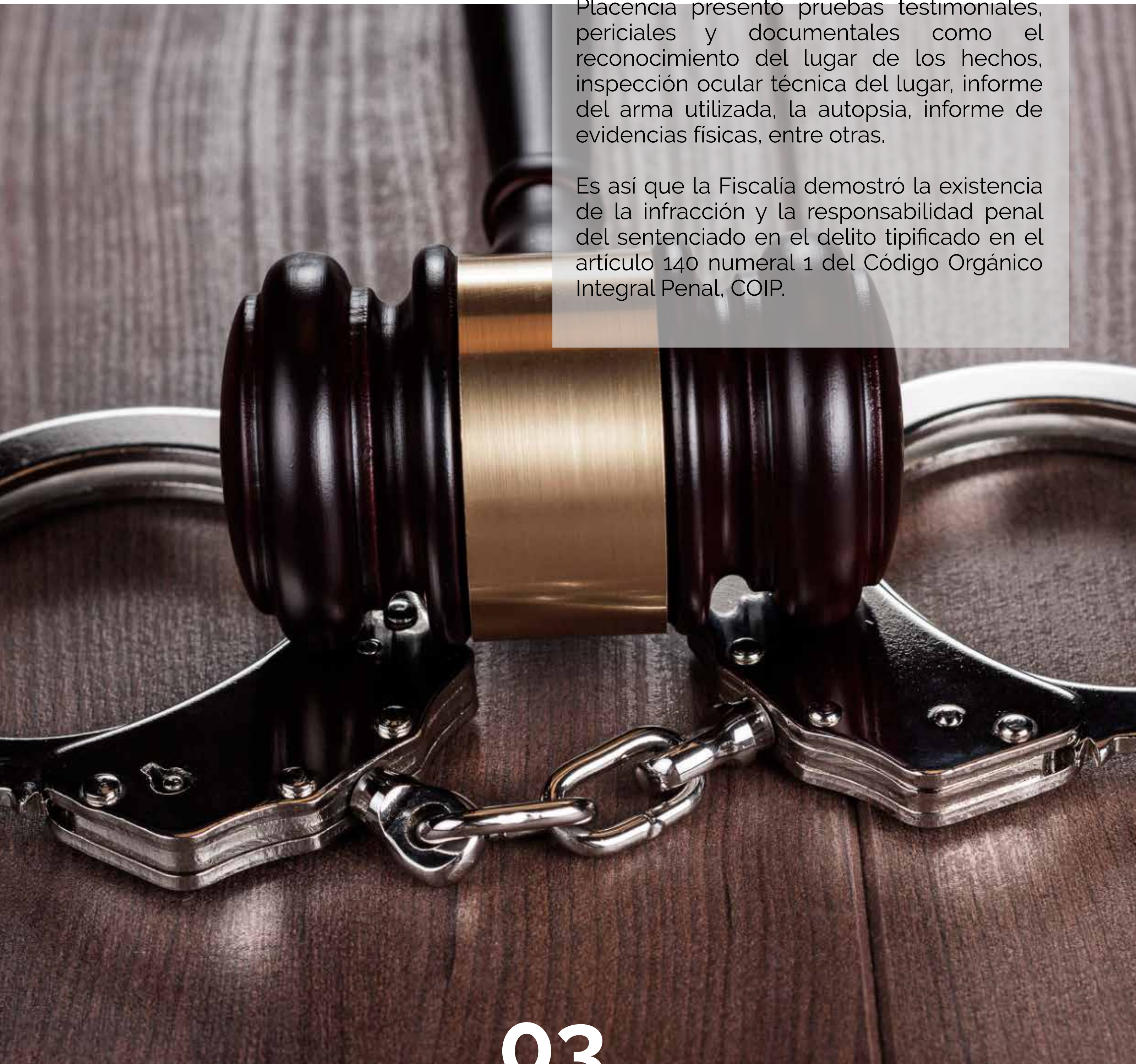
LOS RÍOS

Tras valorar los elementos probatorios presentados por el Fiscal de Personas y Garantías, Jairo Placencia, el Tribunal de Garantías Penales de Babahoyo sentenció a Boris Enrique F.P., a 26 años de pena privativa de libertad como autor del asesinato de su padre, Alejandro F.M.

El hecho ocurrió el 6 de mayo de 2018, en la parroquia Barreiro de Babahoyo, cuando la víctima fue golpeada en la cabeza con piedras y palos por el sentenciado, quien se encontraba en el interior de su domicilio.

En la audiencia de juzgamiento, el fiscal Jairo Placencia presentó pruebas testimoniales, periciales y documentales como el reconocimiento del lugar de los hechos, inspección ocular técnica del lugar, informe del arma utilizada, la autopsia, informe de evidencias físicas, entre otras.

Es así que la Fiscalía demostró la existencia de la infracción y la responsabilidad penal del sentenciado en el delito tipificado en el artículo 140 numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal, COIP.





# SENTENCIA DE 29 AÑOS A CIUDADANO POR VIOLAR A SU HIJASTRA

## PICHINCHA

Con base en las pruebas presentadas por la Fiscalía, Ángel María Ch., fue declarado culpable del delito de violación a su hijastra de 13 años de edad y fue sentenciado a 29 años 4 meses de pena privativa de libertad.

La fiscal María Belén Luna, de la Unidad Especializada en Violencia de Género de Pichincha, durante la audiencia de juzgamiento, realizada el 04 de abril de 2019, presentó pruebas testimoniales, documentales y periciales entre las que constan: el testimonio de los agentes investigadores, el examen médico legal y ginecológico a la adolescente, el reconocimiento del lugar de los hechos, el testimonio de la madre, así como una valoración psicológica que determinó que hubo manipulación y retractación de la adolescente de 13 años de edad.

Es así que el Tribunal de Garantías Penales, integrado por los magistrados Luis Manosalvas (ponente), Wilson Caiza y Daniel Tufiño, declaró la culpabilidad de Ángel María Ch. como autor del delito de violación. El fallo también incluye como medida de reparación integral que el procesado pague USD 1.000 a los familiares de la víctima, así como una multa de 800 salarios básicos unificados.

En la teoría del caso, la fiscal expuso que el hecho ocurrió el 01 de mayo de 2018, cuando la adolescente retornaba a su domicilio, ubicado en el norte de Quito. Llegó y se percató de que su padre de crianza estaba en esa vivienda, pues su madre había salido a hacer algunas diligencias.

Minutos después el victimario, con el pretexto de descansar, fue hasta el dormitorio de su hijastra, se recostó junto a ella y cometió el delito. La adolescente logró zafarse y corrió hasta el baño donde se refugió hasta cuando su madre llegó.

En la etapa de la instrucción fiscal, que duró 30 días, la adolescente se retractó. Dijo que había presentado la denuncia porque su padrastro no le había comprado un teléfono celular. Sin embargo, el informe psicológico es-

tableció que la víctima fue manipulada por su madre y hermana mayor, bajo la premisa de que el procesado era el sustento del hogar y que estaban dispuestas a perdonar la agresión sexual a la adolescente si el procesado se comprometía en cambiar.

Cabe mencionar que durante la audiencia de juicio, el procesado presentó una testigo falsa, quien mencionó que el día de los hechos, ella se encontraba con Ángel María Ch., sin embargo, el juez al percatarse que la testigo estaba faltando a la verdad ordenó su detención por el presunto delito de perjurio.

En ese caso, el Tribunal sentenció a Ángel María Ch., con el máximo de la pena (22 años) que prevé el artículo 171, numeral 3, pero se aumentó un tercio (7 años 4 meses) por las circunstancias agravantes del artículo 48, numerales 5 y 9 del mismo cuerpo legal, porque el victimario compartía el núcleo familiar y conocía a la víctima, totalizando una pena privativa de libertad de 29 años 4 meses.

